



**JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE  
BOGOTÁ  
SECCIÓN SEGUNDA**

Bogotá, D.C., ocho (08) de octubre de dos mil veinte (2020)

**EXPEDIENTE:** 11001-33-35-010-2020-00009-00  
**ACCIONANTE:** MARÍA LEONOR PEÑA HERNÁNDEZ  
**ACCIONADOS:** NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO  
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL  
MAGISTERIO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE  
BOGOTÁ y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  
**CLASE:** INCIDENTE DE DESACATO

**ANTECEDENTES**

1. A través de auto con fecha del 22 de septiembre de 2020 se declaró es desacato a la doctora **GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO** en su calidad de Representante Legal General de la **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**, y se sancionó con arresto de 2 días y multa de 5 SMLMV, por no dar cumplimiento al numeral tercero del fallo de tutela proferido por este Juzgado el 04 de febrero de 2020, donde se ordenó lo siguiente:

*“**TERCERO.**- Así mismo, se **ORDENA** al Representante Legal de la **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**, o quien haga sus veces, que dentro del mismo término improrrogable de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, a través de la dependencia que corresponda, proceda a resolver de forma clara, precisa y de fondo la petición elevada por la parte actora el 17 de junio de 2019 con número de radicado E-2019-100990, donde solicitó, entre otros asuntos, se dé cumplimiento a la sentencia proferida el 18 de mayo de 2018 por el Juzgado Veinticuatro Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, por medio de la cual se ordenó realizar un pago por concepto de sanción moratoria a favor de la demandante, por el pago tardío de unas cesantías<sup>1</sup>, notificándole la respuesta en debida forma acorde con la normativa que se tiene establecida para ello”.*

**CONSIDERACIONES**

En el presente asunto se inició y se dio trámite de incidente por desacato propuesta por la accionante María Leonor Peña Hernández, quien actúa a través de apoderada, el cual fue decidido en el auto de fecha 22 de septiembre del año en curso, que declaró que la doctora **GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO** en su calidad de Representante Legal General de la **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**, desacató la orden impartida por esta Agencia Judicial en el numeral tercero de la sentencia de tutela de fecha 04 de febrero de 2020.

Ahora bien, a través de correo electrónico calendado 7 de octubre último, la entidad accionada allegó escrito de cumplimiento, señalando, entre otros asuntos, que a través del Oficio No. 20201072615491 del 23 de septiembre de 2020 dio respuesta de fondo a la

---

<sup>1</sup> Folios 4 y 5.

petición elevada por la parte actora el 17 de junio de 2019 y que el mismo fue remitido para notificación de la accionante a través del correo electrónico suministrado en el mentado requerimiento, éste es, albertocardenasabogados@yahoo.com; para lo cual aportó los respectivos soportes.

Visto el contenido del Oficio en mención, la entidad le indicó que una vez consultado el aplicativo oficial del Fondo, se evidenció que el reconocimiento de la sanción por mora con ocasión al pago tardío de las cesantías solicitado por la demandante, fue incluido en nómina el 28 de agosto de 2020.

Con base en lo anterior, el Despacho considera que la entidad accionada está dando una respuesta de fondo y congruente con lo solicitado a la petición en controversia; no obstante, en aras de tener certeza si la parte actora fue debidamente notificada acerca del contenido del referido documento, el 8 de octubre del corriente, a las 7:41 a.m., se procedió a llamar a la apoderada de la accionante, a uno de los números telefónicos aportados al expediente, éste es, 3343778, en donde manifestaron que la Fiduciaria la Previsora ya dio cabal cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado en el numeral tercero del fallo de tutela de la referencia.

De lo dicho en precedencia, se destaca lo siguiente: **i)** que la Fiduciaria la Previsora S.A., en cumplimiento de la orden judicial expidió el Oficio No. 20201072615491 del 23 de septiembre de 2020, resolviendo de fondo la petición elevada por la parte accionante y, **ii)** que dicho documento fue debidamente notificado a la parte demandante a través del correo suministrado en el escrito petitorio, éste es, albertocardenasabogados@yahoo.com.

En efecto, y en lo que respecta al sub lite, observa el Despacho que la Fiduciaria la Previsora S.A. – FIDUPREVISORA, dio cumplimiento a la orden impartida en el numeral tercero de la sentencia del 04 de febrero de 2020, toda vez que como ya fue señalado, se efectuó la notificación del Oficio No. 20201072615491 del 23 de septiembre de 2020, respondiendo de fondo la petición elevada por la accionante.

Ahora bien, de conformidad con las actuaciones surtidas dentro del incidente de desacato, procede el Despacho a determinar si pese a que ya se encuentra en firme la sanción impuesta por esta sede judicial, es procedente o no la revocatoria de la misma.

En principio es evidente que la decisión de sanción adoptada por el Despacho se fundamentó en la ausencia del cumplimiento del numeral tercero del fallo de tutela proferido por esta sede judicial el 04 de febrero de 2020; no obstante, debe precisarse que el incidente de desacato en la acción de tutela es un trámite excepcional que pretende no la imposición de una sanción, si no el cumplimiento de una orden emitida por un Juez Constitucional.

En efecto la Corte Constitucional ha sostenido en diversos pronunciamientos que la finalidad del trámite del incidente por desacato no es otra que lograr el cumplimiento de la

orden emitida por el Juez de tutela, en procura de los derechos fundamentales, y no la imposición de la sanción por sí misma.

En este sentido, ha indicado la Corporación que así se hubiese impuesto sanción por desacato, dicha decisión será revocable por los jueces, siempre y cuando se acredite el cumplimiento del fallo de tutela, así se expresó recientemente en el Auto 181 de 13 de mayo de 2015:

*“(…) 149. Debido a lo expuesto, “la imposición o no de una sanción en el curso del incidente de desacato puede llevar a que el accionado se persuada del cumplimiento de la orden de tutela. En tal sentido, en caso de que se empiece a tramitar un incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se ha desatendido lo ordenado por el juez de tutela, y quiere evitar la imposición de una sanción, deberá acatar la sentencia. De igual forma, en el supuesto en que se haya adelantado todo el procedimiento y decidido sancionar al responsable, éste podrá evitar que se imponga la multa o el arresto cumpliendo el fallo que lo obliga a proteger los derechos fundamentales del actor”*  
(…)

*153. En conclusión, (i) la figura del cumplimiento es de carácter principal y oficioso, mientras que el desacato es subsidiario; (ii) para imponer sanciones en el trámite incidental de desacato el juez debe establecer la responsabilidad objetiva y subjetiva del incidentado; (iii) para determinar la responsabilidad subjetiva del incidentado, se debe verificar que el desobedecimiento de la orden de tutela es producto de una conducta caprichosa o negligente de este; (iii) corresponde al incidentado informar al juez las medidas desarrolladas para alcanzar la satisfacción del fallo, así como las razones precisas que en el caso concreto han impedido el cumplimiento de la orden de tutela, evitando justificaciones vagas o genéricas que no tengan relación con la situación específica del demandante; (iv) de manera concomitante con el trámite de desacato, el juez debe dictar las medidas de cumplimiento que sean del caso, con el objeto de remover los obstáculos que impidan el acatamiento del fallo y; (v) en el supuesto en que el juez haya adelantado todo el procedimiento incidental y decidido sancionar por desacato al responsable, éste podrá evitar que se materialice la multa o el arresto cumpliendo el fallo que lo obliga a proteger los derechos fundamentales del actor. De este modo, si se verifica el cumplimiento del fallo luego de consultada y confirmada la sanción, el juez de primera o única instancia deberá declarar inmediatamente el cumplimiento de la sentencia y revocar o dejar sin efecto la sanción impuesta y las actuaciones que dependan de ella, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corte y la competencia asignada por el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 que dispone que este “mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza”. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que ya se hubieren ejecutado.*

*154. Bajo tal óptica, la Sala dispondrá que los jueces de la República al estudiar incidentes de desacato en contra de los responsables de Colpensiones por el presunto desconocimiento de sentencias de tutela que ordenaron responder una petición prestacional o acatar una sentencia judicial, deberán aplicar las pautas jurisprudenciales sintetizadas en el numeral 153 de la parte motiva de esta providencia.*  
(…).”

De lo dispuesto por la H. Corte Constitucional, se concluye que es procedente revocar la decisión de sanción, siempre y cuando no se hubiese ejecutado.

En el presente asunto, y atendiendo el precedente constitucional antes aludido, encuentra esta instancia judicial que el objeto mismo del desacato impuesto a la Dra. GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO, en su calidad de Representante Legal General de la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., se encuentra satisfecho, toda vez que dieron cumplimiento a lo ordenado por este Despacho Judicial en el sentido de emitir una respuesta congruente, de

En consecuencia, teniendo en cuenta que se ejecutó lo que legalmente se le había impuesto al Representante Legal General de la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., aún después de haberse iniciado el trámite del incidente de desacato, se entiende que se dio cumplimiento a la orden judicial proferida por este Despacho en el numeral tercero de la providencia calendada 04 de febrero de 2020, por lo que se dispondrá el levantamiento de la sanción impuesta, equivalente a 2 días de arresto y 5 salario mínimo legal mensual vigente, debiéndose comunicar dicha decisión a las autoridades respectivas para lo de su competencia.

## RESUELVE

**PRIMERO:** Declarar que la Dra. GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO, en su calidad de Representante Legal General de la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, dio cumplimiento al numeral tercero de la sentencia de tutela de fecha 4 de febrero de 2020, proferida por este Despacho judicial en protección del derecho fundamental de petición de la señora MARÍA LEONOR PEÑA HERNÁNDEZ con cédula de ciudadanía 28.194.187.

**SEGUNDO:** En consecuencia, levántese la sanción impuesta a la Dra. GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO, en su calidad de Presidenta y Representante Legal General de la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, referente a arresto inmutable por dos (2) días, y multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

**TERCERO:** Comuníquese la presente decisión a las autoridades respectivas para lo de su competencia.

**CUARTO:** Notificar personalmente a las partes la presente decisión, y por Secretaría líbrense los oficios pertinentes.

**QUINTO:** Surtido lo anterior y en firme el presente auto **ARCHÍVESE** el expediente.

## NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

*[Handwritten signature]*

**Juez**

**JUZGADO 10 ADMINISTRATIVO**  
**ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**  
**SECCIÓN SEGUNDA**

Por anotación en **ESTADO No.** \_\_\_\_\_ notifico a las  
partes                      la                      providencia                      anterior                      hoy  
\_\_\_\_\_ a las 08:00 A.M.

**LUIS ALEJANDRO GUEVARA BARRERA**  
*Procurador*

**JGR**